

ANEXO II

ACUERDO CIVICO Y SOCIAL

DECLARACION DE PRINCIPIOS

Ante la degradación de las condiciones de la vida pública y privada en la Argentina, la irresponsable destrucción de la República, la apropiación y vaciamiento del Estado, la continuidad de la corrupción, la ininterrumpida concentración del ingreso y la perpetuación de un país intolerablemente injusto y cada vez más violento, el ACUERDO CIVICO Y SOCIAL se propone como un espacio plural de participación y consenso que supere la mera oposición al oficialismo y sea capaz de generar las condiciones político-institucionales para un nuevo país socialmente cohesionado, económicamente avanzado e inteligentemente integrado al mundo.

Ética, República y distribución del ingreso son nuestros principios. Una ética entendida no sólo como lucha contra la corrupción sino como un contrato moral que comprometa a los argentinos contra las corporaciones que controlan la vida nacional, contra las matrices mafiosas que se han apropiado del estado y contra las prácticas clientelistas que erosionan la democracia y la justicia y quitan a los ciudadanos no sólo sus derechos sino su autonomía y dignidad. Una República entendida no solamente como movimiento abstracto de los mecanismos institucionales sino como garantía de poderes estatales responsables ante los ciudadanos y de una democracia sustantiva, basada en la representación y la participación y no en la delegación. Una distribución del ingreso que sea real y no sólo discursiva, que incluya el acceso a la educación y a la cultura y no dependa del asistencialismo clientelista sino que se base en los derechos universales de los ciudadanos y del pleno empleo de sus capacidades en el contexto de la sociedad del conocimiento y la información.

Ética, República y Distribución del ingreso son valores que no pueden ser alcanzados bajo los modelos de país ya fracasados. Para hacerlos realidad, es necesario un nuevo paradigma de desarrollo económico-social. Por eso no estamos por una versión más prolija del presente modelo autoritario y patrimonialista que traiga más de lo mismo, sino por un nuevo paradigma que supere las antinomias (campo o industria, autoritarismo o democracia, distribución o crecimiento, neoliberalismo o neopopulismo corporativo, setentas o noventas, república o justicia social) que durante la segunda mitad del siglo XX han llevado al fracaso a una nación escasamente poblada, educativamente avanzada y en la que abundan los recursos naturales. De los laberintos creados por las antinomias del pasado se sale por arriba, entrando de una buena vez al siglo XXI en el que la riqueza se produce y se distribuye de acuerdo a nuevos procesos y estructuras, tan lejanos de la devastación del territorio y la mentalidad extractiva como de la explotación del trabajo manual en una cadena de producción industrial.

La Argentina tiene excelentes ventajas comparativas en este terreno, el del futuro: el uso de un idioma que es el segundo más hablado del mundo, una apreciable capacidad creativa y de innovación de sus habitantes, numerosos núcleos de desarrollo tecnológico sobrevivientes a las debacles causadas por el sistema político, una tradición de excelencia en biotecnología, principal campo de desarrollo de la revolución científica, y un nivel cultural todavía elevado a pesar del maltrato al que ha sido sometida la educación en el país. Si los argentinos lográramos aplicar nuestra capacidad para generar información, conocimientos, emociones, diversidad cultural y comunicación a todas las ramas de la actividad económica y social -como han hecho hasta ahora sólo unos pocos sectores- el resultado sería una explosión de desarrollo económico y progreso social y no el vulnerable crecimiento sin mejora del perfil social y productivo al que asistimos hoy.

ACUERDO CIVICO Y SOCIAL se expresa también a favor de la superación de la falsa opción entre las relaciones carnales y el aislamiento internacional.

Creemos profundamente en las enormes posibilidades que para sus habitantes puede abrir una Sudamérica orientada al mundo y al futuro, cohesionada por infraestructuras comunes, integrada no sólo económica sino políticamente, con instituciones parlamentarias y judiciales capaces de solucionar conflictos paralizantes como los enfrentan hoy a miembros de un mismo bloque.

Proponemos una Unión Sudamericana dotada de mecanismos de decisión democráticos de escala continental, que sean capaces de arbitrar los problemas regionales y de proveer al continente una estrategia sostenible de desarrollo que no acabe con sus democracias

nacionales sino que confiera nuevo vigor a sus mejores principios. Creemos en una Unión Sudamericana con capacidad de decisión autónoma y a la vez integrada al resto del planeta, deseosa de abandonar el victimismo improductivo y de aprovechar las oportunidades que la mundialización está abriendo para los países en desarrollo. Soñamos con una Unión Sudamericana que no sea un mero nacionalismo ampliado a la escala regional ni un muro que separe a sus países del mundo, sino que se constituya como un puente hacia él. Y creemos también que la Argentina tiene un rol importante en su construcción, en la reforma democrática de la ONU y demás organismos internacionales, y en la progresiva creación de instituciones democráticas en el ámbito global.

En el campo institucional nacional El ACUERDO CIVICO Y SOCIAL se pronuncia por un verdadero federalismo fundado en un régimen de coparticipación equitativo que acabe con el chantaje y la cooptación de gobernadores provinciales, por la restitución al Parlamento y a la Justicia de su dignidad e independencia avasalladas, por una reforma política y del sistema de financiación de los partidos que impida la eterna reproducción del viejo orden político, por una reforma fiscal que acabe con la concentración de la renta y por la devolución de los poderes sustraídos al Parlamento y el fin del hiperpresidencialismo.

La Argentina ya ha tenido suficientes presidentes fuertes y no necesita otros sino una democracia republicana fuerte, regida por un nuevo contrato moral y ciudadano que garantice tanto la calidad institucional como la distribución social y geográfica de sus riquezas. Y cuando decimos contrato moral y ciudadano no hablamos de abstracciones sino que decimos derecho de todos a la alimentación y los medicamentos por encima de cualquier otra consideración; decimos ingreso ciudadano universal para la infancia y la tercera edad; decimos derecho a la protección de una justicia autónoma; decimos igualdad de oportunidades garantizada por el sistema educativo; decimos no discriminación; decimos derecho a una información y una comunicación independientes; decimos estado eficiente en la lucha contra las mafias narcotraficantes; decimos libertad de opinión, de credo y de conciencia; y decimos liberación del miedo y la opresión.

No comprendemos la polémica entre quienes creen que el problema de la seguridad se soluciona acabando con las injusticias sociales y quienes piensan que se arregla con un eficiente sistema policial y judicial, dilema tan fácil de solucionar poniendo una “y” donde los polemistas ponen una “o”. Estamos por una seguridad humana, es decir: por una seguridad que garantice el derecho a la vida pero que incluya además el acceso de todos a la salud, la vivienda digna, la cultura y la educación. Una seguridad humana que comience por el irrestricto respeto a la ley por parte de todos, comenzando por quienes gobiernan. Una seguridad humana en la que una protección eficaz de las fuerzas policiales no signifique gatillo fácil y en la que el derecho a la vida y a la tranquilidad de los unos y las garantías constitucionales de los otros tengan la misma dignidad.

Queremos un ACUERDO CIVICO Y SOCIAL que apunte a recuperar el Gobierno y el Estado para los ciudadanos, pero queremos también una transformación ética, republicana e igualitaria que vaya más allá del Gobierno y del Estado.

Por eso nos comprometemos a respetar en El ACUERDO CIVICO Y SOCIAL los mismos principios que proponemos para el país: proyectos a largo plazo que no sacrifiquen el futuro al presente; toma de decisiones colegiada, transparente y abierta al debate; modelo organizativo pluralista, horizontal y democrático que no excluya a la dirigencia política ni a los partidos pero que tampoco se limite a ellos, sino que promueva la inclusión plena de ciudadanos y organizaciones provenientes de todos los sectores de la sociedad civil.

Somos David contra Goliath y lo sabemos. Y sabemos también que fue David quien triunfó. Venimos de la política, de la cultura, de la religión, de las artes, de las ciencias, y del trabajo duro y del oscuro llano. Somos parte de un diálogo pluralista, intercultural e interreligioso de quienes piensan distinto pero mantienen una misma línea de conducta y un conjunto de principios no negociables ante el poder de quienes dicen pensar lo mismo pero están unidos solo por sus intereses económicos.

Exigimos nuestros derechos y aceptamos nuestras responsabilidades. No nos preocupa el poder corporativo ni sus ataques y amenazas sino el cinismo y el escepticismo de muchas de sus víctimas. Luchamos por un estado de derecho constitucional que sea algo más que letra muerta. Seguiremos dando batalla para que no haya reconciliación sin justicia pero también lucharemos para crear un escenario público en el que la manipulación de la Historia sea repudiada, para instaurar un sistema jurídico que proteja la paz y la verdad y castigue la violencia y la mentira, y para que no haya impunidad para nadie.

No combatimos con las armas del poder sino contra las armas con que el poder hegemónico tiene maniatada a una Argentina de la que dice ser el único capaz de gobernarla cuando en realidad es el único capaz de hacerla fracasar.

Invitamos a todos los habitantes del país preocupados por el actual estado de cosas a sumarse a nuestros esfuerzos. Superar las críticas a un sistema agotado para asumir la tarea de construir una alternativa democrática con ETICA, REPÚBLICA, DISTRIBUCIÓN del INGRESO y un NUEVO PARADIGMA DE DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL es el desafío que lanzamos hoy.

BASES DE ACCION POLITICA Y PLATAFORMA ELECTORAL AÑO 2009

AGENDA LEGISLATIVA 2007-2011

"Por una nueva y mejor mayoría, para seguir construyendo el futuro en paz"

La elección legislativa del próximo 28 de junio es una elección excepcional. Se trata de una elección adelantada debido a la manipulación grosera de las instituciones por parte de un gobierno para el cual la ley sólo se cumple si lo beneficia. Es una elección que pone en juego no sólo la mitad de la Cámara de Diputados y la tercera parte del Senado, sino que también mostrará a la fuerza política que marcará el rumbo del país en lo inmediato y la que se encontrará en condiciones de disputar la Presidencia en el próximo turno electoral.

Se trata, además, de una elección que tendrá lugar en medio de una crisis internacional económica y social de graves proporciones, provocada por el derrumbe del sistema financiero mundial, pero agravada por las malas políticas locales del gobierno justicialista de los Kirchner, que han conducido a la parálisis de la producción, al incremento del desempleo y la pobreza, al deterioro de los bienes públicos y al desfinanciamiento del Estado. Y es, por último, una elección signada por la promoción de divisiones artificiales y violentas de la sociedad por parte de quienes tienen la responsabilidad de gobernar para todos.

Ante esta elección excepcional, proponemos al país y a la provincia un programa que es, simultáneamente, un proyecto y una identidad. Nuestro programa es, la Constitución Nacional, porque ella es la carta de navegación de un país, donde se reflejan los valores y principios fundamentales de un pueblo.

Proponemos respetarla fielmente como ella manda, pero también ponerla en práctica, porque la Constitución es el programa para realizar la gran promesa argentina. Como nos recordara tantas veces El Ex Presidente Raúl Alfonsín, la Constitución nos llama a constituir la unión nacional: nos pide que superemos las desigualdades sociales y territoriales, que hagamos realidad un federalismo de concertación, un federalismo fuerte e integrado. Nos convoca a afianzar la justicia: a que se haga realidad el principio de igualdad de todos ante la ley, a que se juzgue la corrupción del poderoso y a que hasta el más humilde pueda acceder a la justicia. Nos ordena consolidar la paz interior: terminar con la violencia social y política que pone en peligro la vida en común, y también a que el estado garantice la seguridad pública, el goce pacífico de nuestros bienes, Nos incita a proveer a la defensa común: a integrarnos con nuestros socios comerciales para incrementar nuestras posibilidades de desarrollo. Nos manda promover el bienestar general: implementar políticas de salud y educación que garanticen el acceso a prestaciones de calidad por parte de todos los habitantes del país. Que todos disfruten de un mínimo nivel de vida decente. Y nos insta a asegurar los beneficios de la libertad: a proteger la diversidad de estilos de vida, opinión, expresión, raza, género y origen. En suma, una sociedad libre y plural, que respete la autonomía de cada uno.

La Constitución Nacional nos indica que las políticas que han de orientar la vida en común de los habitantes del suelo argentino deben hacerse en el Congreso de la Nación. El Congreso es el ámbito donde los representantes del pueblo y de las provincias deciden, luego de un debate abierto y transparente, las políticas necesarias para cumplir el plan constitucional. Por eso presentamos este Programa de Acción Legislativa a la consideración del pueblo de la Argentina pidiendo el apoyo de su voto, con la aspiración de formar en

torno a estas ideas una nueva mayoría, capaz de poner en marcha las políticas responsables que nos permitan salir de la crisis y seguir construyendo en paz un futuro común de progreso y de justicia.

La crisis económica mundial puede resultar propicia para las naciones que no han basado el crecimiento de sus economías en el sector financiero sino en los sectores productivos. Un modo de funcionamiento del mercado financiero llega a su fin, pero no se han clausurado ni la globalización, ni el comercio internacional. La hora nos exige entonces que superemos la “miopía” dominante en la toma de decisiones. Acortar el horizonte es un comportamiento a veces rentable en el presente, pero que en general tiende a producir graves complicaciones en plazos más extendidos.

El mayor desafío económico que enfrentamos es establecer una “visión” compartida del país, que oriente las decisiones y discusiones cotidianas, para construir un rumbo de crecimiento sustentable y de inclusión social. Los diferentes actores políticos y sociales deben ser capaces de establecer un horizonte en el futuro, dejando de lado la precariedad de lo inmediato, para de esa manera poder diseñar las estrategias y decisiones que apunten un crecimiento sostenido, con plena inclusión social.

El gobierno desprecia la búsqueda de los consensos necesarios para arribar a esta “visión” común sobre el país y su economía. No hay modo de arribar a acuerdos sostenibles en el largo plazo, sino es a través del diálogo abierto, franco y sincero entre todas las fuerzas políticas. Por el contrario, el gobierno decide unilateralmente y todas sus medidas están teñidas por la coyuntura, lo que provoca pérdida de oportunidades en los buenos tiempos, y ausencia de instrumentos de compensación en los tiempos malos. Así, el mayor riesgo que enfrenta entonces Argentina es que el “cortoplacismo” de los Kirchner impida al país aprovechar las condiciones estructurales que la economía mundial le está presentando y que necesariamente le va a presentar, porque no todos los países van a quedar en la misma situación cuando la crisis finalmente se supere.

Argentina es una de esas naciones que tiene para proporcionarle al mundo lo que hace falta para construir el futuro. Porque en Argentina el futuro ya está en marcha. El futuro se construye en nuestras fábricas, donde obreros y empresarios han formado importantes industrias en la siderurgia, la agroquímica, las tecnologías de la información. El futuro se construye en nuestra tierra, donde los campesinos, chacareros e industriales han armado una de las redes económicas más productivas del mundo, basada en el círculo virtuoso de la modernización tecnológica para la siembra, la cosecha y la industrialización. El futuro se construye en nuestras universidades y centros de investigación, donde científicos argentinos de jerarquía internacional han desarrollado invenciones y descubrimientos capaces no sólo de potenciar nuestra producción sino también de contribuir a resolver críticos problemas de salud e infraestructura. En Argentina se construye el futuro porque tenemos todo para lograrlo: una producción agroindustrial pujante para alimentar al mundo; industrias eficientes para ayudar a modernizarlo; y el capital humano necesario, quizás el bien máspreciado, para pensar cómo llevar el progreso más allá de sus actuales fronteras.

La crisis innecesaria que hoy impide a la Argentina realizar plenamente su potencial no es la crisis internacional, sino la crisis local, que está paralizando la actividad productiva, expulsando trabajadores al desempleo y la pobreza, y condenando a la nación a enfrentarse en divisiones estériles que sólo producen violencia, miseria y atraso. Esta crisis local es el resultado de las malas políticas y de la mala gestión de la administración justicialista del kirchnerismo, que insiste en no aplicar las lecciones que duramente aprendimos los argentinos en estos 25 años de democracia.

Los argentinos aprendimos de nuestras crisis anteriores que para recuperarnos es necesario impulsar las actividades con más capacidad para la generación y la incorporación de conocimientos y tecnologías, como el agro y la industria eficiente, pero el kirchnerismo decidió poner a estos sectores de rodillas y hacer en cambio un país sólo para los amigos del matrimonio presidencial, donde lo que paga no es el trabajo honesto y esforzado sino el sometimiento, la adulación y la corrupción. Los argentinos aprendimos de nuestras crisis anteriores que para combatir eficazmente la pobreza y el desempleo es necesario subsidiar

el ingreso y la capacitación de los más vulnerables en actividades productivas con posibilidades de empleo, pero el kirchnerismo redujo la política social a dádivas que no alcanzan para la mínima subsistencia y a emprendimientos improductivos sin futuro que sólo atan a sus circunstanciales beneficiarios a las cadenas del clientelismo. Los argentinos aprendimos de nuestras crisis anteriores que para enfrentarlas con éxito es necesario hacerlo entre todos, a través del diálogo y del consenso, cumpliendo la ley y respetando a las instituciones, pero el kirchnerismo estableció que la unión nacional sólo es posible bajo su voluntad, que la justicia sólo existe para proteger a los amigos del poder, que la paz interior está librada a jueces sobrecargados y policías sin presupuesto, que el bienestar general llega por la sola fuerza de declamaciones antes que de políticas, por medio de mentiras, falseando la realidad y que los beneficios de la libertad sólo deben asegurarse para quienes se someten a sus designios.

El actual gobierno justicialista nos dice ahora que para salir de la crisis hay que fortalecer la gobernabilidad, pero esa es otra falsa y peligrosa consigna. ¿Qué gobernabilidad se fortalecería renovándole al kirchnerismo la mayoría en las próximas elecciones legislativas? ¿La gobernabilidad de la administración que destruyó en un año la mejor situación económica argentina de los últimos cien años? ¿La gobernabilidad del grupo político que colocó al país al borde del abismo social reactivando los enfrentamientos que tiñeron de sangre y fuego cincuenta trágicos años de historia argentina? ¿La gobernabilidad del matrimonio presidencial que considera al Estado un patrimonio personal, a las elecciones un “escollo” para sus planes de dominio y a la prensa libre un enemigo? ¿La gobernabilidad de quienes han desquiciado el funcionamiento institucional, concentrando el poder político y económico, despojando de atribuciones al Congreso Nacional? ¿La gobernabilidad de quienes modificaron la ley del Consejo de la Magistratura para tratar de controlar a los jueces y asegurarse su impunidad?.

Para salir de la crisis no hace falta entonces tener más gobernabilidad kirchnerista, sino tener un buen gobierno: un gobierno responsable. Un gobierno responsable es un gobierno que se hace cargo de que hay problemas: de que hay recesión, desocupación, inseguridad, pobreza, desazón entre los trabajan, desconfianza entre los que desean seguir construyendo el futuro. Un gobierno responsable es un gobierno que se hace cargo de resolver los problemas: de impulsar las actividades productivas, de potenciar a los que trabajan para aprovechar las oportunidades abiertas por la crisis internacional, de proteger y ayudar a los más vulnerables para que puedan contribuir lo mejor de sí mismos para el beneficio de todos. Un gobierno responsable es un gobierno que se hace cargo de rendir cuentas ante los ciudadanos: de informar la verdad sobre el estado de la nación, de discutir las alternativas disponibles para enfrentar los problemas, de declinar sus soluciones preferidas cuando ellas no contribuyen a que el resto de la sociedad realice sus mejores posibilidades.

En las próximas elecciones se pone en juego la oportunidad de formar una nueva mayoría: una mayoría de los argentinos responsables que diariamente, en las tierras, en las fábricas, en las calles, en las universidades, en las oficinas desde la Capital Federal al más pequeño de los pueblos, se hacen cargo con su trabajo de que funcione lo mejor posible este formidable emprendimiento común que llamamos la Argentina. Una nueva mayoría legislativa que ponga en la agenda las políticas públicas responsables que hacen falta para salir de la crisis. Una nueva mayoría que a través de las leyes que dicte obligue al Poder Ejecutivo a aplicarlas, en beneficio del país. Una nueva mayoría que controle en serio los abusos del poder. Una nueva mayoría que sea el germen del próximo gobierno nacional de la Argentina: de un gobierno responsable que no venda falsos progresos, estadísticas mentirosas ni divisiones artificiales de la sociedad, sino que se haga cargo de poner a la Argentina a construir un futuro próspero y en paz.

Nuestro Programa de Acción Legislativa 2009-2011 apunta a fortalecer la acción del Congreso con la sanción de nuevas leyes que insertas en una estrategia económica, no sólo contribuyan a salir de la crisis, sino que inicien el camino del futuro que nos merecemos, el que soñaron nuestros padres fundadores, el que comenzaron a construir nuestros abuelos, el que nosotros mismos duramente intentamos todos los días sostener.

Los ejes de nuestro programa son:

-La reactivación y el desarrollo de la economía productiva: la producción argentina no se reactivará ni desplegará sus capacidades mientras se la ahogue con políticas que afectan su rentabilidad, traban el comercio y resultan extremadamente distorsivas.

Por eso proponemos:

- Impulsar de modo consistente el desarrollo de las diversas redes productivas agroindustriales, a partir de una fuerte articulación entre la producción, comercialización, distribución, logística, transporte e industria.
- Facilitar e incentivar las exportaciones al mercado mundial de productos originados en nuestras economías regionales.
- Reducir y segmentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias sin que ello comprometa la solvencia fiscal.
- Promover la transición desde la producción de recursos naturales (energéticos, forestales, mineros, pesqueros) e insumos industriales básicos (aluminio, petroquímica, siderurgia) hacia el mundo de los productos diferenciados.
- Estimular la expansión de la producción de servicios informáticos y de la industria del software. Esto requiere de una mayor calificación de los recursos humanos y del fortalecimiento del sistema de innovación.
- Fortalecer a las empresas pequeñas y medianas.
- Recuperar los niveles salariales malversados por las mentiras estadísticas.

Estas son las fuerzas que nos permitirán avanzar en la superación de la crisis local y aprovechar las oportunidades que se nos ofrecen para el desarrollo sostenido de la Argentina.

-El fortalecimiento del federalismo: Sin un federalismo fuerte la economía productiva no podrá desarrollarse plenamente y languidecerá a merced de la discrecionalidad y la arbitrariedad del centralismo. Hoy sabemos que un federalismo moderno al servicio de regiones con elevada competitividad y mejor calidad de vida de los ciudadanos, debe estar basado en políticas que combinen atribuciones en manos del gobierno central y locales. Las funciones a cargo de las provincias y municipios deben estar adecuadamente financiadas, por lo que resulta indispensable que las provincias recuperen la capacidad fiscal que les ha sustraído el gobierno justicialista de los Kirchner.

Por eso proponemos:

- Recuperar para las provincias la capacidad de impulsar políticas productivas adecuadas y el financiamiento de políticas de compensación de los servicios transferidos (educación, salud, agua potable):
- Coparticipar el 100% del Impuesto al Cheque.
- Asignar a las provincias el 15% de la Coparticipación que le fuera sustraído durante la década menemista para financiar la seguridad social nacional, garantizando al mismo tiempo la sustentabilidad del sistema provisional-
- Regular el uso de los Aportes del Tesoro Nacional, para que efectivamente subsidien los desequilibrios financieros provinciales y apoyen así las políticas autónomas locales-

Por supuesto, la aspiración de fondo debe ser la sanción de la ley de coparticipación federal como establece la Constitución, pero mientras se la discute estas son las herramientas que permitirán a los gobiernos provinciales, los que más cerca están de las necesidades y de las posibilidades productivas del país, disponer lo necesario para realizarlas de la mejor manera posible.

-La regeneración de la cohesión social: la paz social y la seguridad pública no llegarán mientras las políticas sociales sigan condenando a los pobres a la desigualdad y la ausencia

de políticas de seguridad sigan alentando la privatización de la seguridad para los ricos y la proliferación del delito, que victimiza especialmente a los sectores populares.

Por eso proponemos:

- Un ingreso mínimo de carácter universal, basado en la sola condición de ciudadanía destinado a los niños, independientemente de la situación laboral de los padres.
- Una asignación universal para la vejez, que garantice a todos los mayores de 65 años un ingreso mínimo de subsistencia independiente de sus aportes jubilatorios
- Un Seguro Universal de Reinserción para los desempleados, condicionado a la actualización de sus capacidades laborales.
- La extensión del seguro de salud a los desocupados y la mejora de los servicios públicos de salud.
- La protección de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas a través de la garantía efectiva de cumplimiento de las leyes de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral y anticoncepción quirúrgica, y de la aplicación plena del artículo 86 del Código Penal sobre los abortos no punibles
- La consolidación de la paridad de género en las responsabilidades familiares, la administración pública, y la representación política dentro y hacia fuera de los partidos políticos, como así también en el ámbito sindical.
- Una ley de Educación Superior que promueva el pluralismo, la investigación y, especialmente, la vinculación de las universidades con la sociedad y el mundo del trabajo,

Los chicos, las mujeres y los desocupados no son sólo el futuro de la Argentina, sino su presente oprimido: garantizar su acceso a la educación y la salud implica removerlos de las redes del delito y crearles las condiciones para que realicen sus mejores posibilidades.

El control y la calidad institucional: las instituciones republicanas no funcionarán como corresponde mientras se concentre todo el poder político y fiscal en la Presidenta, se falsifiquen las estadísticas y se desmantelen a los organismos de control. Ello sólo caracteriza a una parodia de una democracia constitucional y se asemeja a un poder feudal sin límites.

Por eso proponemos:

- La sanción definitiva de la ley de acceso a la información pública.
- La sanción de una ley que regule la utilización de la publicidad oficial, para terminar con el escandaloso uso que hace el gobierno para premiar o castigar adeptos o disidentes.
- La derogación de los superpoderes presupuestarios y la disminución y control de los fondos fiduciarios, para que los representantes del pueblo y de las provincias le aseguren a la ciudadanía que se ha de gastar lo que dispongan sus representantes en el Congreso.
- La normalización del INDEC como entidad autárquica administrada por funcionarios independientes del poder político
- El fortalecimiento de la Auditoría General de la Nación a través de una reforma que otorgue la mayoría del colegio de auditores a la oposición parlamentaria.
- La ampliación de las facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, para que efectivamente pueda investigar y perseguir judicialmente la corrupción.
- La reglamentación de los informes y de la asistencia del Jefe de Gabinete a las Cámaras del Congreso, para asegurar que el gobierno nacional rinda cuentas de su gestión como manda la Constitución.

Sólo con instituciones que garanticen efectivamente a la ciudadanía los instrumentos para conocer las políticas del gobierno, discutirlos y defender sus derechos frente a los abusos podremos los argentinos instar a los gobiernos a consensuar sus políticas y rectificar sus rumbos equivocados para el beneficio de toda la nación.

-La garantía de seguridad y justicia para todos: no habrá seguridad ni justicia para todos mientras las agencias estatales que deben garantizarlas operen con legislación vetusta e inadecuada para prevenir y perseguir los delitos complejos, juzgar a sus responsables y crear las condiciones necesarias para evitar la reincidencia.

Por eso proponemos:

- La Reforma de la Ley Orgánica de la Policía Federal, para convertirla en una agencia federal de investigaciones profesionalizada y especializada en prevenir e investigar delitos complejos.
- La Reforma del Código Procesal Penal de la Nación, para intensificar el sistema acusatorio que dispone la Constitución, crear fiscalías especializadas, con facultades y aptitudes técnicas para perseguir delitos sencillos de complejos, otorgar mayores facultades a las víctimas, hacer los procedimientos más ágiles y eficientes, para arribar muy rápidamente a la instancia oral.
- La sanción de un nuevo régimen penal juvenil, para que los menores infractores de la ley penal reciban una sanción, que guarde proporción a su falta de madurez, pero también los mismos derechos que cualquier imputado.
- La sanción de una nueva ley del Consejo de la Magistratura que garantice la independencia de los jueces, dejando sin efecto la nefasta reforma kirchnerista.
- La reforma integral de la Ley de Armas, que asegure un financiamiento y capacidades institucionales adecuadas al Registro Nacional de Armas, para evitar la proliferación de armas reutilizadas en delitos.
- El fortalecimiento del control sobre el Sistema Penitenciario, para eliminar la corrupción de su administración y garantizar a los condenados condiciones de vida que les permitan regenerar su comportamiento y reinsertarse en la vida social

Sólo con una Policía, un Ministerio Público, un Poder Judicial y un Servicio Penitenciario eficientes, siguiendo una clara política criminal del estado, adaptados a la complejidad que presenta el delito en tiempos modernos, podrá garantizarse a los argentinos que habrá seguridad en las calles y en los hogares, y que la infracción a la ley será sancionada por una justicia independiente, cualquiera sea la condición de la víctima.

-La re inserción en los foros mundiales: El escenario internacional ha cambiado, no hay espacio para una política exterior de baja intensidad y nulo compromiso. El multilateralismo es el único camino a recorrer si queremos proteger la paz, la seguridad y el bienestar de los argentinos. Múltiples foros internacionales se abocan a cambiar las reglas fracasadas. Allí hace falta el prestigio perdido de la política exterior argentina, constructora de confianza, hermanada con los países vecinos, demoliendo arcaicas hipótesis de conflicto, tomando riesgos a favor de la amistad, de la cooperación y de los intereses de nuestros pueblos. La construcción de confianza y la práctica de la cooperación elevarán nuestra voz en un mundo que cambia a pasos agigantados.

Seamos claros, nuestro país no será respetado ni será capaz de influir efectivamente en los asuntos internacionales, mientras su política exterior consista en despreciar a los países centrales y a los organismos multilaterales, sembrar discordia con los socios regionales y arrogarse patéticamente la calidad de ejemplo para enseñar al mundo qué hacer.

Por eso proponemos:

- La coordinación sistemática de las posiciones a sustentar en los foros multilaterales con los restantes países de la región y desde allí con todos los países del mundo que compartan las ideas democratizadoras del sistema internacional.
- El impulso a una reforma de los organismos de crédito y de la Organización Mundial de Comercio que fortalezca el comercio mundial, que atienda a las necesidades de los países emergentes y proteja la producción y el trabajo nacional.
- La resolución definitiva de las numerosas disputas que enfrentan entre sí a muchos de nuestros vecinos, generando una situación de empeoramiento manifiesto del clima de cooperación que disfrutamos desde el advenimiento democrático.

- El restablecimiento de la idea fuerza que dio origen al Mercosur: una plataforma para ocupar un lugar en el mundo y no un espacio para confrontaciones comerciales accesorias, que ni siquiera dirime las principales controversias regionales.
- Considerar los trabajos internacionales por la preservación del ambiente como una alta prioridad nacional, participar activamente en los foros que se ocupan del cambio climático. Comenzando por abandonar las irrisorias y vergonzosas políticas nacionales sobre la materia.
- Ser activos y respetables en los acuerdos de cooperación en la lucha contra los delitos internacionales, a saber: el crimen organizado, la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, la trata de personas de personas, etc. Argentina obtuvo los mayores beneficios de sus relaciones exteriores cuanto más confiable y constructivo se mostró el país en la arena internacional, pues la confianza y la cooperación son las bases para el beneficio mutuo en la comunidad de naciones.

Esta Alianza entre la UCR LA COALICION CIVICA, EL MID y otras Fuerzas políticas y Sociales es la fuerza que hace falta para ofrecerle a los argentinos el gobierno responsable que hoy está necesitando el país para salir de la crisis.

El gobierno justicialista de los Kirchner ha falsificado el progresismo y quiere ahora falsificar la democracia, asustando a los argentinos para convencerlos de que la gobernabilidad está en juego y de que sólo la unión nacional bajo la voluntad del matrimonio presidencial puede sacarnos de la crisis. Pero las máscaras ya se han caído, y los argentinos sabemos que el responsable de la crisis que azota al país no es el mundo, sino el matrimonio Kirchner, y que sería irresponsable seguir confiando el presente y el futuro de nuestro país a quienes creen que las cosas sólo irán bien si los demás se arrodillan ante ellos. Pero hoy más que nunca tenemos que tener en cuenta que la Argentina no es del matrimonio Kirchner, ni de sus amigos. La Argentina es de los que trabajan diariamente para construir el futuro, de esa nueva mayoría que está naciendo, de esa mayoría de argentinos responsables que quiere un gobierno responsable que se haga cargo de recrear las condiciones para que cada uno de los habitantes del país pueda dar lo mejor de sí mismo y así obtener el mayor beneficio para todos.

FORMOSA Abril de 2009